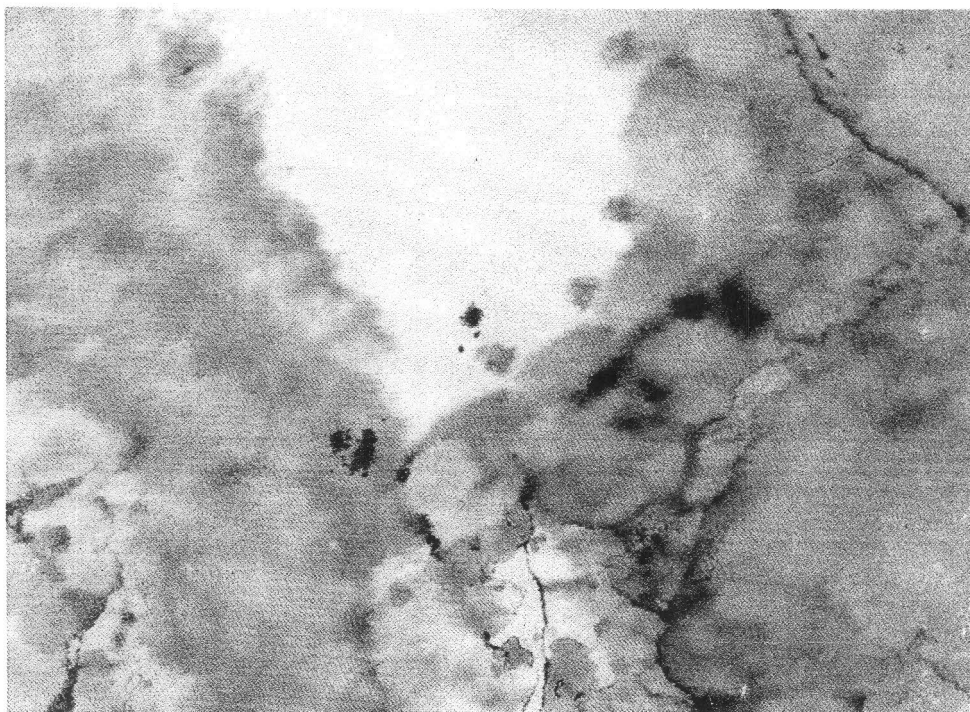


UNIVERSIDAD

ISSN 0187-8948

VOL 2 • NUM 5 • OTOÑO 1990



ESTADO Y UNIVERSIDAD
EN EUROPA
Guy Neave

LA ESCUELA JAPONESA
EN DEBATE
Cummings • Ichikawa

EVALUACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR
ANUIES

ESTUDIANTES Y
PROFESORES EN LOS 80
Gil • Fernández



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

UNIVERSIDAD

FUTURA

ISSN 0187-8961

VOL 2 • NUM 5 • OTONO 1990

REVISTA

1991

Investigación y desarrollo

La educación superior en el futuro

La revolución tecnológica en la educación superior

El futuro de la educación superior en el futuro

Después del Congreso de la UNAM

La educación superior bajo la evaluación estatal

Tendencias en Europa Occidental, 1986-1988

Guy Neave

17 La educación japonesa en debate

18 Cómo perciben los norteamericanos
la educación japonesa
William K. Cummings

27 Una respuesta desde Japón
Shogo Ichikawa

32 La educación superior en cifras.
Estudiantes y profesores en la década

55 ANUIES. IX Reunión Extraordinaria. Julio de 1990. Tampico.
Estrategia para la evaluación de la educación superior

70 Modernización productiva y educación superior en México
Elia Marum Espinosa

79 Las desigualdades institucionales
en la investigación en ciencias sociales
Humberto Muñoz García y M^a Herlinda Suárez Zozaya

85 20 años de planes sobre ciencia y tecnología
Carlos Pallán Figueroa

94

¿Cómo se enseña en nuestras universidades?

100

BREVES

¿Quiénes son los buenos?
La reforma en otras partes
El racismo en la escuela sudafricana
USA: académicos al alza

106

RESEÑAS

¿Universidad y sociedad?
Modernización conservadora y crisis académica en la UNAM
La revolución inconclusa. Las universidades
y el Estado en la década de los ochenta

—
LAS
DESIGUALDADES
INSTITUCIONALES
EN LA INVESTIGACION
EN CIENCIAS SOCIALES

HUMBERTO MUÑOZ GARCIA

MA. HERLINDA SUAREZ ZOZAYA

Introducción

Las ciencias sociales integran un conjunto de disciplinas y labores académicas que se estableció y desarrolló en el país en formas institucionales, al menos desde hace unos setenta años. En lo que ha sido este periodo, las ciencias sociales contribuyeron al conocimiento de la sociedad mexicana, crearon y recrearon la cultura y propusieron directrices, orientaciones y opciones para conducir a la nación mediante acciones razonadas fundadas en la investigación sistemática. En suma, cumplieron una importante función social.

No obstante lo anterior, en la actualidad las ciencias sociales tienen ante sí una perspectiva que limita sus posibilidades de consolidación y desenvolvimiento. Por lo general, las líneas de política en materia científica no tienen en cuenta o desconocen el significado de estas ciencias para el proceso de transformación que se espera ocurra en el país en los próximos años y, en consecuencia, no se les han dado los apoyos adecuados para su desarrollo.

Este documento trata de la desigualdad institucional que existe en la estructura nacional de investigación en ciencias sociales. Su propósito es discutir algunos efectos que han tenido las acciones de la política oficial, en materia de educación superior y de ciencia y tecnología, sobre el proceso de diferenciación institucional durante las últimas dé-

cadass. Asimismo, mostrar que los centros de investigación de esta área constituyen actualmente una estructura altamente diferenciada, cuya dinámica de estratificación ha estado impulsada, en parte, por dichas acciones.¹

El texto se divide en tres apartados que consideran la temporalidad del proceso. En el primero se expone a grandes rasgos la evolución institucional de los centros de investigación y de qué manera se diferenciaron. En el segundo se presentan brevemente las desigualdades institucionales que privan a la fecha, de acuerdo con la ubicación geográfica y la disciplina que desarrollan los centros. Por último, se abordan las tendencias probables de la desigualdad, lo que se ilustra tomando como indicador la participación de posgraduados dentro de las plantas académicas de las instituciones.

La cantidad de posgraduados que tiene

¹ Es importante hacer notar que nos referimos a desigualdades en términos de disposición de recursos económicos, humanos y de infraestructura, y no a modelos organizacionales (Clark, 1977; Brunner, 1988). Compartimos la perspectiva de Burton R. Clark (1989) cuando considera que es un error por parte de los gobiernos hacer esfuerzos para tratar que todo sea igual entre las universidades, así como dentro de cada universidad. La lógica de las diferentes disciplinas exige modelos de organización diferentes. Sin embargo, para poder responder a esta lógica se requiere contar con un determinado nivel de recursos.

un centro se ha convertido en un parámetro para evaluar su prestigio académico y en un criterio de distribución de recursos. Desde esta perspectiva, la desigualdad institucional puede enfocarse, por un lado, en el marco de la política de la educación superior y de las necesidades de formación de recursos humanos para la investigación. Por el otro, como un problema de mercado laboral académico, lo cual resulta importante en la situación presente que se caracteriza por la falta de oportunidades de empleo en las instituciones dedicadas a la investigación, disminución de recursos para la actividad y bajos salarios del personal académico.

Algunas afirmaciones hechas en el presente documento tienen una referencia estadística particular.² Sin embargo, estamos lejos de contar con una fuente de información que permita un análisis exhaustivo del tema que nos ocupa. Aun a riesgo de un tratamiento general, nos parece que existen elementos que por su relevancia es necesario considerar en la formulación y evaluación de las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología en México.

1. Desarrollo y desigualdad institucional

A finales de los años veinte comienza en el país el proceso mediante el cual se institucionaliza la investigación social.³ La infraestructura y los recursos para ejercer esta actividad se concentraron en la Ciudad de México y se ligaron principalmente a instituciones dedicadas a la enseñanza superior. Bajo esta pauta general, la creación de los centros de investigación ha tenido sus propios ritmos y modalidades en cada disciplina.

Casi paralelamente al surgimiento de las primeras instituciones de investigación aparecen los estudios de posgrado, específicamente el doctorado, como el espacio para formar investigadores profesionales.⁴ Con ello, el sector académico (en especial las estructuras de investigación) se configura como un mercado laboral en el que se considera que el personal empleado en esta actividad

requiere tener mayor conocimiento que el que se obtiene generalmente con la licenciatura.

Desde su inicio, la actividad de investigación en México contó con pocos apoyos para desenvolverse. Las acciones emprendidas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas llevaron a crear un organismo gubernamental (CONESIC) que teóricamente debía encargarse de organizar, mantener y estimular la investigación científica en el país, pero que en la práctica nunca dispuso de los recursos para cumplir su cometido. No es sino hasta los años setenta, gracias a las perspectivas de riqueza y abundancia que se tenían en el país, que la actividad de investigación recibe un conjunto de apoyos para estimular su crecimiento (Márquez, 1982).

En ese periodo, los recursos destinados a apoyar la investigación social y la educación superior se ampliaron de manera considerable: se crearon nuevos centros de investigación y crecieron los ya existentes, se incrementó notablemente el número de programas y la matrícula de maestría y doctorado (Valenti y Reyna, 1980; Suárez y Herrera, 1988) y se implantaron programas de becas para estudiar posgrados en el país y en el extranjero. En consecuencia, el mercado de trabajo académico se vio expuesto a una nueva dinámica (Casillas, Gil et al., 1989).

Muchos de los nuevos centros de investigación se abrieron en la provincia. El gobierno recomendó a distintas instancias aumentar su gasto en los estados para alentar la creación de los mismos fuera del Distrito Federal, como un apoyo a la promoción de polos de desarrollo. Asimismo, hizo explícita la necesidad de homogeneizar las normas del mercado laboral académico (requisitos de ingreso, promoción y definitividad). Si bien la política de descentralización permitió disminuir las desproporciones entre la provincia y la capital, la dinámica de expansión de los centros y los posgrados ocurrió a un ritmo y a un volumen que flexibilizó las normas de contratación del personal; en muchos casos se improvisaron las plantas académicas. Los nuevos centros tuvieron que incorporar investigadores que no contaban con la experiencia y la formación escolar adecuadas.

Sin embargo, desde el inicio de los años ochenta el gasto público federal y los recursos destinados a la investigación y a la educación superior sufrieron decrementos muy sustanciales (Muñoz y Suárez, 1987) sin que se lograra consolidar la estructura nacional de investigación. También se decidió seguir una política de congelamiento de plazas, en la medida de lo posible (Muñoz y Suárez, 1985). Las realidades impuestas por la crisis financiera llevaron a los encargados de distribuir los

² Uno de los problemas con los que se enfrenta la política científica de nuestro país es la falta de información confiable, oportuna y accesible acerca de la situación, características y dinámica de los elementos que participan en el quehacer científico nacional. En 1984, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMESCO), bajo los auspicios del CONACYT, levantó información sobre los centros, proyectos y personas dedicados a las ciencias sociales. A partir de esta fuente pueden conocerse algunos aspectos del estado de la investigación en estas disciplinas. Sin embargo, las cifras publicadas no sirven a nuestros propósitos y la elaboración de cruces para análisis más detallados sugiere que hay problemas de confiabilidad en la información. Por ello, optamos por citar solamente cifras relativas que nos parecen confiables.

³ Se refiere a la organización y práctica formal de la investigación en establecimientos dedicados a esta actividad.

⁴ La aparición del posgrado en la UNAM coincide con la de

los primeros institutos de investigación. En 1929 se ofrecieron, por primera vez, grados académicos correspondientes a maestrías y doctorados en: Ciencias, Bellas Artes, Letras y Filosofía (Estrada Ocampo, 1983, p. 26).

escasos fondos a hacerlo de acuerdo a "prioridades". Con este criterio se disminuyó drásticamente el apoyo a las ciencias sociales y a los posgrados encargados de formar investigadores en el área.

En un contexto de mayor escasez, la distribución de recursos para la investigación social provocó que se acentuaran las diferencias entre los centros. Las instituciones que contaban con una cierta capacidad y organización académica y administrativa lograron mejorar su infraestructura: ampliaron sus instalaciones, adquirieron equipos, acervos documentales y bibliográficos modernos y adecuados. Asimismo, contrataron personal académico con altos niveles de estudio y tuvieron la posibilidad de organizar y dirigir programas de posgrado para formar nuevos investigadores, actualizar y reponer a la planta. Las instituciones recién formadas o poco consolidadas no pudieron aprovechar de igual manera los apoyos para su crecimiento. En consecuencia, las heterogeneidades institucionales y geográficas se hicieron mayores y se enfatizaron las prioridades disciplinarias.

2. Situación actual

La desigualdad institucional que caracteriza a la estructura de investigación en ciencias sociales ha sido resultado, en buena medida, de la elevada concentración de los esfuerzos educativos en la capital, reforzada por el crecimiento de la población y del área urbana.

Las acciones orientadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México han tratado de contender con estos problemas sin que a la fecha se tengan los resultados esperados. Actualmente, la disposición de recursos de las instituciones dedicadas a la investigación y a la educación superior es desigual; compárese, si no, a las que tienen su sede en la capital frente a las que se encuentran en las entidades federativas.

En términos generales, los centros de la Ciudad de México son más antiguos, tienen un tamaño mayor y están más consolidados que los de provincia (Benítez, 1987). Instituciones que operan en la capital, como la UNAM, la UAM o El Colegio de México, para poner tres ejemplos, están dotadas de una amplia infraestructura académica y han tenido posibilidades de contratar investigadores con altos niveles de formación y experiencia académicas. La distribución diferencial de recursos ha significado, entonces, que los centros capitalinos tengan una capacidad instalada de producción de conocimientos mayor que todos los que se encuentran en provincia. En los de la capital se realizan cerca de 2/3 de los proyectos de investigación en ciencias sociales del país. Asimismo, dan ocupación a casi 7 de cada 10 investigadores mexicanos (Guzmán, 1986).⁵

Como se mencionó, las acciones para

descentralizar han tenido algún efecto sobre la distribución institucional en el territorio —la mayor parte (53.8%) de los centros funcionan en provincia. Sin embargo, el aumento en el número de establecimientos en el interior del país no ha estado necesariamente asociado a una reducción de las diferencias en las capacidades académicas de éstos frente a los capitalinos. Además, algunas de estas acciones han provocado que se generen diferencias institucionales al interior de una misma entidad. Varias sedes de investigación que se han creado en provincia provienen de instituciones consolidadas que operan en la Ciudad de México. Ellas se rigen por una dinámica de trabajo y valores propios que no siempre permean al resto de las instituciones locales. En ocasiones, por el contrario, dificultan la interacción con los académicos del lugar y la formación de recursos humanos para la zona o región.

Por otra parte, las acciones de política han contribuido a diferenciar los distintos ritmos y formas de desarrollo de las disciplinas de las ciencias sociales. En México existen varias que cuentan con una importante infraestructura e investigadores de alto nivel que se dedican exclusivamente a ellas, mientras que otras apenas tienen recursos materiales y humanos.

Puede decirse que los centros que se dedican a disciplinas consideradas de *tradición o prioritarias* para el *desarrollo nacional* tienen más y mejores recursos con respecto a los que desarrollan otras disciplinas sociales. La expansión acaecida después de los años setenta estuvo basada principalmente en cuatro disciplinas: economía, sociología, antropología e historia. Según una serie de indicadores (Benítez, 1987) estas disciplinas tienen una mayor antigüedad institucional en México y han alcanzado un mayor desarrollo en el conjunto. Los centros dedicados a ellas representan 54.6% del total y concentran una proporción importante de los recursos de infraestructura física y humanos de alto nivel con que cuenta la investigación en ciencias sociales (Guzmán, 1986).

Así, como no se han reconocido las particularidades institucionales provocadas por la desigualdad y las especificidades de desarrollo de las diversas disciplinas sociales, la política en materia de ciencia y tecnología ha contribuido a acentuar las diferencias entre los centros. México llega a los años noventa con una estructura de investigación en ciencias sociales poco consolidada e integrada por establecimientos dotados de recursos y prestigio muy disímiles.

3. Tendencias probables del desarrollo institucional y la participación de los posgraduados

Una forma de observar la situación ac-

los investigadores (Guzmán, 1986).

⁵ En provincia, Jalisco, Michoacán y Puebla tienen 10.5% de

tual de la investigación en ciencias sociales en cuanto a su desigualdad institucional es a través de la participación de posgraduados en las plantas académicas. Según datos de COMECO y CONACYT, en 1984, del total de centros de investigación en estas disciplinas, solamente en 35% de tales centros laboraban predominantemente maestros y doctores. En contraste, en un tercio de los centros los investigadores tenían exclusivamente el título de licenciatura o la calidad de pasantes de licenciatura (Guzmán, 1986; Herrera, 1986).

La reducida proporción que representan los posgraduados en las instituciones de investigación en ciencias sociales indica que hasta la fecha no ha podido contenderse con el problema de la improvisación de recursos humanos que se originó en los setentas. Hasta ahora no se han tomado las medidas adecuadas para que los investigadores que no tienen posgrado puedan obtenerlo y promoverse en la carrera académica.

La ya de por sí escasa participación de posgraduados en los centros que se dedican a las ciencias sociales se puede ver afectada si se insiste, como hasta ahora, en la necesidad de reorientar la matrícula de educación superior, específicamente la del posgrado, hacia las ciencias formales, las naturales y las ingenierías. Esta consideración se finca en el supuesto de que la concentración de estudiantes en los campos del conocimiento social revela un molde tradicional y una respuesta inadecuada del sistema educativo a los requerimientos del sistema productivo. Sin embargo, la evolución de la matrícula en estas disciplinas debe analizarse desde una perspectiva más compleja que tenga en cuenta las necesidades de la estructura nacional de investigación en ciencias sociales, en el contexto de la dinámica global del mercado de trabajo, y el papel que juega la educación superior.

Desde este punto de vista, se considera que la expansión del posgrado en las disciplinas sociales ha respondido a la demanda de recursos humanos altamente calificados provocada por el crecimiento de los servicios, que comprenden las actividades de docencia e investigación, pero también a las que se realizan en otras ramas del sector terciario, como la administración pública y demás tareas que lleva a cabo el gobierno.

El mercado de trabajo en el país, durante los ochentas, ha estrechado sus márgenes para crear puestos de alto nivel, lo que, aunado a la expansión educativa, ha permitido que aumente el *credencialismo*, esto es, la exigencia de poseer certificados de maestría y doctorado para acceder a tales posiciones. El peso que en este sentido tiene la ocupación terciaria en la estructura del empleo ha conducido, en parte, a que la demanda por educación en el nivel de posgrado se concentre en las disciplinas sociales, lo que no ha significado que la estructura de investigación en ciencias sociales integre al personal de alto nivel que requiere para

cumplir cabalmente sus funciones.

Unido a lo anterior, actualmente la mayoría de los centros enfrentan problemas económicos que les impiden satisfacer todas las necesidades que demanda la realización de los proyectos y contratar académicos con posgrado que refuerzan las plantas o desarrollen nuevas líneas de trabajo. Así, se ha llegado a una situación en la que los que consiguen egresar de un posgrado encuentran empleo y condiciones de trabajo más favorables fuera de las instituciones académicas. Hacer investigación se ha vuelto una actividad cada vez menos atractiva para quienes egresan de un posgrado. Si esta tendencia se mantiene, algunos centros y disciplinas enfrentarán próximamente un problema de envejecimiento de la planta académica y, en consecuencia, carencia de innovaciones para continuar la producción de conocimiento.

Por otra parte, tener personal con posgrado se ha convertido en una necesidad para que los centros adquieran recursos. Comúnmente, los organismos que apoyan la investigación en el país otorgan prioridad a los proyectos en los que participan posgraduados. Por esta vía, algunas instituciones han podido adquirir equipamiento y continuar su labor de investigación. Dada la reducida participación de investigadores con posgrado que existe en el total de la estructura de investigación en las disciplinas sociales y debido a las marcadas diferencias que existen entre las instituciones que la conforman, la aplicación de este criterio para otorgar fondos o apoyos podría llevar a situaciones de polarización y deterioro institucional en un medio en el que no es extraño que desaparezcan los centros (Benítez, 1987).

Las diferentes capacidades para disponer y movilizar recursos por parte de los centros incide en la distribución desigual de posgraduados, pues es natural que éstos prefieran trabajar en instituciones que ofrezcan ciertas condiciones de empleo y vida académica. Algunas medidas de apoyo a los investigadores, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), han agravado esta preferencia al realizar sus evaluaciones con base en criterios fundamentalmente cuantitativos de tipo *per capita*. En estas circunstancias, los investigadores buscan realizar su trabajo en instituciones que les permitan obtener resultados en el menor tiempo y que les brinden posibilidades de publicarlos a la brevedad.

Al poner énfasis en este tipo de criterios con respecto a los de *calidad* o *esfuerzo*,⁶ algunos instrumentos de política científica operan con elementos contradictorios. Para volver al caso del SNI:

⁶ Por ejemplo, investigar nuevos temas, usar nuevas metodologías, empezar un instrumental técnico más refinado o simplemente producir un conocimiento original y riguroso de la realidad del país.

por un lado, se pretende brindar un mayor apoyo a los investigadores de provincia y promover la descentralización otorgando becas de mayor monto a los miembros adscritos a instituciones que se encuentran fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por el otro, se utilizan criterios de evaluación que favorecen a los investigadores que trabajan en instituciones dotadas de mayores recursos que, como se sabe, generalmente se encuentran en la capital.

Así, con frecuencia, las acciones que se emprenden con el fin de apoyar al sistema nacional de ciencia y tecnología benefician solamente a ciertos sectores o ámbitos de la investigación. Además, al no tener en cuenta el marco social, económico y político en el que se lleva a cabo esta actividad en México y al no plantear acciones integrales que contemplen dar apoyos a instituciones, proyectos e investigadores, los resultados de las acciones de política han contribuido a exacerbar la dinámica de desigualdad que caracteriza al conjunto institucional dedicado a las ciencias sociales.

Para que la investigación que se realiza en México contribuya al conocimiento científico y al *desarrollo nacional* se requiere fortalecer y consolidar la estructura de investigación en ciencias sociales. La diferenciación institucional debe y puede darse en términos de exigencias al trabajo y la organización propia de cada centro, pero no por una distribución discriminada de recursos. Sin embargo, se tiene la impresión de que las líneas de la política actual no se encaminan al logro de una situación más balanceada de las posibilidades institucionales para hacer ciencia, sino que, por el contrario, se orientan a ampliar las brechas existentes entre las instituciones en cuanto a disponibilidad de recursos y prestigio académico.

Consideraciones finales

La conclusión más general que se desprende de este trabajo es que las acciones oficiales de apoyo a la actividad científica no han respondido a las necesidades reales de la estructura de investigación en México.

Hasta ahora no se ha formulado una política en esta materia que reconozca las particularidades con que operan los centros e integre los distintos elementos (investigadores, proyectos e instituciones) que participan en la investigación. En consecuencia, no ha podido conformarse un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnología. Lo mismo ocurre con la educación superior y específicamente con el posgrado.

Las líneas de política actual buscan impulsar el desarrollo científico del país mediante un conjunto de acciones: lograr una descentralización eficiente de las actividades científicas; apoyar el establecimiento de proyectos de investigación de carácter multidisciplinario e interinstitucional en los

que participen grupos de investigadores de diversas instituciones nacionales; nutrir financieramente a la investigación con recursos privados, en la medida en que la comunidad científica oriente su trabajo a la solución de problemas vinculados al desarrollo nacional; establecer programas de reconocimiento y estímulos especiales a determinados investigadores; perfeccionar los mecanismos de evaluación de los proyectos de investigación científica para que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se continúen, refuercen o cancelen los apoyos otorgados; crear programas de formación de recursos humanos que aseguren que los becarios se incorporen, al término de sus estudios, a grupos institucionales de investigación con productividad comprobada; mantener o reforzar a tales grupos y apoyar la formación de nuevos grupos en áreas y proyectos prioritarios en los que medie el compromiso de las instituciones académicas de asegurarles un ambiente propicio para el desempeño de sus funciones.

De nueva cuenta, la política oficial contiene elementos contradictorios que afectan a las ciencias sociales: se quiere revertir la tendencia histórica del centralismo, pero se propician acciones que implican que los recursos se canalicen hacia las instituciones más consolidadas, generalmente asentadas en la capital. Por otra parte, se establecen políticas o criterios globales que terminan por ser inoperantes porque no se reconoce la heterogeneidad que existe en la estructura de investigación. Para descentralizar es preciso involucrar a varios centros en programas comunes (por ejemplo, a nivel regional), pero para lograrlo se requiere de esfuerzos concertados que son difíciles de instrumentar, en virtud de la estratificación institucional que existe. Al mismo tiempo, los criterios para otorgar apoyos y financiamiento se inscriben en una lógica utilitarista del conocimiento y de competencia entre las instituciones, que en el marco de la desigualdad puede provocar una mayor diferencia en las capacidades de emplear recursos humanos y en las condiciones académicas con las que operan los centros.

La política científica ha destacado prioridades en el campo tecnológico y la necesidad de que la ciencia se vincule con el aparato productivo. Se mantiene inadvertido que la modernidad y el impacto de la técnica modifican las condiciones de vida en la sociedad, las formas y distribución de las ocupaciones y las maneras de pensar y actuar, etc. Y, sobre todo, que el estudio de estos aspectos les corresponden a las ciencias sociales.⁷

⁷ Es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en lo que se refiere a Ciencia y Tecnología, no hace alusión explícita, ni una sola vez, a las ciencias sociales y las humanidades. Hay párrafos en que especifica que los apoyos irán dirigidos a las ciencias básicas y a las ingenierías.

Así, de mantenerse esta perspectiva, puede esperarse que, a pesar de su importancia actual, la investigación social en México se vaya reduciendo a unas cuantas instituciones, ubicadas principalmente en el D.F.; se restrinja a algunas disciplinas y a ciertos temas, y se favorezca a unos pocos investigadores que encontrarán apoyo en los programas gubernamentales o institucionales para aumentar sus ingresos, pero no su salario.

En las acciones que se han hecho explícitas para desarrollar la investigación todavía no aparece con claridad qué papel jugará la ciencia y, menos aún las ciencias sociales, para alcanzar la modernidad. No está claro qué se puede hacer en el país con la ciencia, a pesar de que se insiste en su importancia. Si el país requiere ajustes para adaptarse al nuevo contexto internacional (en el que priva una creación acelerada de tecnologías y conocimientos y nuevas formas de integración social y dominación política), entonces deberán formularse programas integrales y establecerse acciones que expandan la estructura científica en todas las disciplinas. En este momento, la investigación no puede conducirse mediante criterios cuyo principal objetivo sea fijar restricciones financieras y otorgar apoyos selectivos; ello repercutiría en una mayor estratificación institucional y en una falta de aprovechamiento de lo que ya existe, para lo cual se han invertido grandes recursos materiales y humanos durante mucho tiempo. UF

Humberto Muñoz García es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Mª Herlinda Suárez Zozaya es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

Bibliografía

- BENÍTEZ, R., **Las ciencias sociales en México**, COMECOS y CONACYT, México, 1987.
- BRUNNER, J.J., "Notas para una teoría del cambio de los sistemas de educación superior", DIE-CINVESTAV, México, 1988. (Mimeo.)
- CASILLAS, M., M. Gil et al., "Mitos y paradojas del trabajo académico", **Universidad Futura**, UAM, México, vol. 1, núm. 1, 1989.
- CLARK, B., "The Organizational Conception", **Perspectives on Higher Education**, University of California Press, 1987.
- "El sistema de educación superior: modelos organizacionales", **Superación académica y reforma universitaria**, UNAM, 1989.
- ESTRADA Ocampo, H., **Historia de los cursos de posgrado de la UNAM**, UNAM, 1989.
- GUZMAN, C., **Los proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades en México**, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1986. (Tesis.)
- HERRERA, A., **Los investigadores de ciencias sociales en México**, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1986. (Tesis.)
- MARQUEZ, Mª Teresa, **10 años del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**, CONACYT, México, 1982.
- MUÑOZ, H. y H. Suárez, "El posgrado en la UNAM: una visión global", **Omnia**, UNAM, México, año 3, núm. 9, 1987.
- "El personal académico de la Coordinación de Humanidades", **Diagnóstico del personal académico de la UNAM**, DGAPA, UNAM, México, 1985.
- SUAREZ, H. y A. Herrera, "El posgrado en ciencias sociales", Tercera Reunión del Posgrado en México, Veracruz, México, 1988. (Mimeo.)
- SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, **Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994**, México, mayo de 1989.
- VALENTI, G. y J.L. Reyna, "Una nota sobre el posgrado en ciencias sociales: el caso de México", **FLACSO**, México, 1986. (Mimeo.)

